

LOS VERICUETOS ELECTORALES

David Ibarra
2 de julio de 2006

Los ciudadanos mexicanos vivimos el término de una contienda electoral singular e intensa. En sentido positivo ya se cuenta con instituciones consolidadas --el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial--, garantes de la limpieza de los comicios independientes --hasta donde ello es posible-- de la influencia del partido en el gobierno. Hay aquí frutos del empeño tesonero de muchos ciudadanos comprometidos con la democracia, entre los que destaca José Woldenberg.

El próximo presidente de la República integrará el primer gobierno casi libre de los resabios del presidencialismo autoritario, pese a las manchas del activismo foxista. Y, sin embargo, surgirá de un proceso electoral donde las propuestas de los partidos no son el centro de las campañas políticas ni reflejan planteamientos sólidos sobre los medios de sacar al país de la ilusión que los mercados todo lo resuelven, de la mediocridad del desarrollo, del desacuerdo político paralizador. Sin duda, todos los candidatos, unos más que otros, hacen alusión a esos problemas. Pero rara vez adelantan soluciones integradoras más allá de ofrecer milagros en el intento de congraciarse con los auditorios en turno.

La contienda electoral se ha alimentado de calumnias, denuestos, golpes bajos que tratan de descalificar a candidatos o partidos no por sus ideas, sino por sus reales o supuestas trapacerías; también se ha alimentado, y a manos llenas, de dineros públicos y privados, legítimos e ilegítimos, hasta organizar con la

videocracia y los affiches, una especie de carnaval electoral y de convertir a la clase política una especie de corte de los milagros.

Quiérase o no, los verdaderos pilares de la legitimidad del poder residen en el respeto a la voluntad popular, esto es, en decisiones tomadas democráticamente y, de otra parte, en el resguardo de los derechos y el bienestar humanos. En ambos terrenos nuestra democracia falla y está en riesgo de derruir los avances alcanzados.

En México se perfilan dos proyectos de nación. El de la derecha con dos cabezas, PAN y PRI, que valoran por encima de todo el programa neoliberal con su énfasis en las virtudes de la estabilidad macroeconómica. Con intención o sin ella, han desviado la campaña política a crear un clima de temor, asentado en la memoria de crisis cambiarias, en el riesgo de un populismo derrochador, o en *slogans* demagógicos de la guerra fría sobre la intervención invasiva de las propiedades de las clases medias. Pese a la historia, sus identidades ideológicas son claras, manifiestas en el intento de desafuero a López Obrador o en la defensa de los intereses político-empresariales que ampararon la aprobación legislativa de la nueva ley de radio y televisión.

El otro proyecto, el de la izquierda, se endereza a corregir las disparidades distributivas extremas y a recobrar algo de la capacidad estatal para imprimir dirección y dinamismo al desarrollo. Con ello, arriesga el beneplácito de la elite económica que pudiesen considerar amenazados sus privilegios. El planteamiento puede resultar utópico o mal pergeñado dados los blindajes internos y las presiones externas, o la falta de cuadros técnicos y profesionales. Esos riesgos, han conducido a moderar posiciones, como se manifiesta en los compromisos de sostener la independencia del Banco de México.

Lo cerrado de las cifras de la votación han impedido a las autoridades electorales a posponer el anuncio del triunfador de la competencia electoral, pese a que los comicios han resultado limpios y nutridos. El país difícilmente resistiría otros seis años más de acumulación de informales, pobres o excluidos. Si el PAN o el PRI triunfan en la elección, tendrían que dar un golpe de timón a las políticas públicas y así ganar, por vía de la tolerancia y la razón democrática, las alianzas legislativas indispensables. Si el triunfo correspondiese al PRD, tendría de inmediato que fortalecer sus nexos con el sector privado nacional, formar órganos de mediación política con empresarios y trabajadores a fin de corresponsabilizar a todos en el diseño e instrumentación de las políticas públicas.